

Carteles de la droga: de Medellín a Sinaloa

Drug cartels in Latin America: from Medellin to Sinaloa

Recordar es vivir: la dinámica del narcotráfico obedece a reglas simples. Mercancía fácil de producir, valor agregado por la prohibición, demanda creciente, ambición y violencia sin límites de los narcotraficantes y una ruta obligada -por donde sea y como sea- de los Andes hacia Estados Unidos. La historia de Colombia se repite, pobre México.

Bruce Bagley

Perfil Biográfico

Dr. Bruce Michael Bagley (Ph.D. in Political Science, University of California at Los Angeles - UCLA - 1979) is Professor of International Studies and Chair of the Department of International Studies at the University of Miami (UM) in Coral Gables, FL. He also served as the Director of UM's Center of Latin American Studies (CLAS) during 2007-08. Prior to his arrival at UM in 1987, Dr. Bagley was an Associate Professor of Comparative and International Politics at the School of Advanced International Studies (SAIS) of The Johns Hopkins University (1978-87) in Washington D.C. (1978-87). He had previously taught in the Department of Political Science at the University of Los Andes in Bogota, Colombia (1973-1978) and has subsequently been a visiting professor at various other Latin American universities including CIDE in Mexico City, FLACSO in Quito, Ecuador, CEBEM in La Paz, Bolivia, and

CRITERIOS

the National University in Bogota, ICESI University in Cali, and EAFIT University in Medellin, Colombia, among others.

Dr. Bagley is co-editor (with Elvira Maria Restrepo) of the forthcoming book entitled “La desmovilización de los paramilitares en Colombia; Entre la esperanza y el escepticismo” (Bogotá: Universidad de los Andes, marzo 2011), co-author with Juan Gabriel Tokatlian of “La política exterior de Colombia durante la década de los ochenta. Los límites de un poder regional”, in Sandra Borda and Arlene B. Tickner (compiladoras), *Relaciones internacionales y política exterior de Colombia* (Bogotá: Uniandes-Facultad de Ciencias Sociales-Departamento de Ciencia Política, 2010) and the author of “**Colombia y la guerra contra las drogas,**” in *Foreign Affairs En Español*, (Enero-Marzo 2008) among other recent publications. He edited *Drug Trafficking Research in the Americas: A Bibliographic Survey*, (Lynne Rienner, 1997) and co-edited, with William Walker, *Drug Trafficking in the Americas* (Transaction, 1995). He has authored 12 other academic books and monographs and more than 100 academic journal articles and book chapters.

Professor Bagley’s current research focuses on U.S.-Latin American relations, with an emphasis on drug trafficking and security issues in Colombia, the Andean region, and Mexico. In addition to his academic pursuits, Dr. Bagley has occasionally served as an expert consultant for the United Nations (United Nations Development Program - UNDP), for the U.S. Government (Department of State, Department of Defense, Department of Justice, the Federal Bureau of Investigation, and the Drug Enforcement Administration), and for several governments in Latin America (Colombia, Ecuador, Bolivia Panama and Mexico) on issues of drug trafficking, money laundering and public security. Dr. Bagley has testified before the U.S. Congress on matters related to Latin America on numerous occasions and has also appeared frequently in US Federal court as an expert witness on drug trafficking, organized crime and political asylum issues in Latin America.

México, violencia e intermediación

Durante las últimas dos décadas, los grupos de crimen organizado mexicano se han involucrado poco a poco en el comercio de cocaína originado en los Andes y en Colombia, concentrándose en el tránsito de cocaína refinada de Colombia a través del territorio mexicano, para introducirla en Estados Unidos.

A comienzos del nuevo milenio, los grupos criminales mexicanos han desplazado efectivamente a los “carteles” de Medellín y Cali, así como a sus herederos, los llamados “cartelitos” que quedaron tras el desmantelamiento de los grandes monopolios en los años noventa.

Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado mundial de cocaína. Se estima que aproximadamente cada año, 350 toneladas métricas (de un total de producción anual de alrededor de 1,000 toneladas métricas) son consumidas por unos seis millones de usuarios estadounidenses, los cuales gastan 40 mil millones de dólares en este proceso. El valor total del mercado de droga en Estados Unidos podría llegar a 150 mil millones de dólares anuales.

Se calcula que las organizaciones criminales mexicanas han ganado por lo menos 15 mil millones de dólares anualmente -con buenas posibilidades de llegar hasta 25 mil millones de dólares en los mejores años- dependiendo del precio del mercado y de las ganancias generadas no sólo por el tráfico de cocaína sino también por otras drogas ilícitas, previamente cultivadas y manufacturadas en México (especialmente marihuana, heroína/opio y metanfetaminas).

El control de este multimillonario mercado ha dado pie a una sangrienta competencia entre los siete principales carteles mexicanos (Sinaloa, Golfo, Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva y la Familia Michoacana) y docenas de bandas menores.

Durante los últimos cinco años (2006-2010) esta competencia ha desatado una guerra pandillera brutal en México, que ha dejado 6.290 homicidios solamente en 2008, cifra que se suma a las 3.200 muertes relacionadas con la droga en 2007 y las 1.807 ejecuciones por droga que tuvieron lugar en los primeros tres meses de 2009. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia el primero de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, se cuentan al menos 34.612¹ asesinatos relacionados con las drogas ilícitas en México.

El alcance y la intensidad de los vínculos de los carteles mexicanos con el comercio de droga andino se han expandido y evolucionado desde inicios de la década de los noventa. Durante esos años, los mexicanos se consolidaron como intermediarios entre los productores andinos y quienes controlan el mercado dentro de Estados Unidos.

Medellín, Cali. El Caribe y Miami

Debido a la creciente demanda de cocaína en Estados Unidos durante los setenta y ochenta, aparece en Colombia el primer gran *cartel*: el “Cartel de Medellín”, seguido por su competidor, el “Cartel de Cali”.

Durante esos veinte años, tanto el cartel de Medellín como el de Cali lograron controlar rápidamente la exportación de cocaína desde los Andes hacia Estados Unidos. Ambos se dieron a conocer como las más poderosas y despiadadas organizaciones criminales del hemisferio occidental. Ambos comenzaron sus empresas por vía aérea, importando clandestinamente la “base” o “pasta” (pasta básica) desde el sur de los Andes, especialmente desde la región del Alto de

1 Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Presidencia de la República. México. <http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=119>

Huallaga en Perú (en donde se originaba 65 por ciento de la producción mundial de coca) y desde la región del Chapare en Bolivia (donde se producía 25 por ciento) hacia Colombia.

En este país se refina el producto, que es trasladado por vía marítima, utilizando buques de carga o botes rápidos, o por vía aérea a través del Caribe, con destino al sur de la Florida. De allí, a través de redes criminales que emplean automóviles, camionetas o aviones, se distribuye por todos los Estados Unidos.

Durante la primera mitad de la década de los ochenta, los vínculos desarrollados por los carteles de Medellín y Cali les proporcionaron una gran acumulación de utilidades. De ello resultó, además, un fuerte aumento en la violencia y la aparición de la “*narcopolítica*”².

Durante esta época, las FARC se implicaron también en la producción y refinamiento de coca, principalmente como “*protectores*” de los campesinos que la cultivaban. También asumieron el papel de “guardias” de los carteles en operaciones de refinación y ayudando a la vigilancia de las pistas de aterrizaje ilegales en el campo colombiano.

Como resultado de su posición dominante dentro del *boom del comercio de cocaína*, los carteles colombianos eran incuestionablemente más ricos y poderosos que los grupos criminales de México, los cuales estaban entonces relacionados solamente con la producción y el contrabando de marihuana y heroína hacia el mercado norteamericano.

En respuesta al flujo de cocaína comercializada a través del Caribe desde Colombia, el presidente Ronald Reagan creó en 1982 el

2 Muchas fuentes estiman que los dos carteles colombianos tenían ganancias que ascendían a 4 mil millones de dólares anualmente, desde inicios de los años ochenta, cuando se expande el “boom” del consumo de cocaína en Estados Unidos.

Grupo de Trabajo del Sur de la Florida (*South Florida Task Force*) y designó al entonces vicepresidente George H. W. Bush a la cabeza del mismo. En un esfuerzo para poner fin al tráfico de cocaína colombiana por el Caribe, este grupo de trabajo tenía como objetivo coordinar – por primera vez – la aplicación de la ley federal y los activos militares en la “*Guerra contra las Drogas*”, declarada por el mismo presidente.

Para financiar esta guerra, Reagan asignó recursos federales y estatales. Para finales de los ochenta, este grupo de trabajo tuvo un gran éxito al reducir en forma importante el tráfico de cocaína proveniente de Colombia hacia la Florida y el sureste de Estados Unidos por las islas caribeñas.

Noriega, Contras y el Cartel de Juárez

En 1984, los sicarios del cartel de Medellín bajo las órdenes de Pablo Escobar asesinan al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Acto seguido y para evitar las furiosas represalias del gobierno del presidente Belisario Betancur, los poderosos *capos* de los carteles de Medellín y Cali escapan a Panamá por algunos meses.

Mientras se escondían en Panamá, los capos descubrieron un nuevo socio en el negocio criminal, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Debido a su posición de jefe de Estado, la situación geopolítica de Panamá y las facilidades que brinda su Canal, Noriega se encontraba en una posición ventajosa para facilitar sus actividades de contrabando de cocaína.

Entre mediados y finales de los ochentas los traficantes colombianos, con la complicidad de Noriega, comenzaron a reordenar sus operaciones de tráfico de cocaína fuera del Caribe, a través de Panamá, América Central, México y, posteriormente, a través de la frontera norte de México, hacia Estados Unidos.

Los conflictos armados en Centroamérica en la década de los ochenta, particularmente la guerra clandestina de los “*Contras*”, patrocinada por la administración Reagan y la CIA en contra de los sandinistas en Nicaragua, generaron condiciones caóticas a lo largo de América Central.

Este caos facilitó la participación de los *Contras* en el tráfico de cocaína a través de la región, lo que les permitió financiar sus actividades clandestinas. Remotas pistas de aterrizaje en Honduras, Guatemala e incluso Costa Rica, fueron usadas por los colombianos, a menudo con la cooperación de oficiales corruptos de los gobiernos locales, para hacer escala técnica y continuar hacia el norte de México. Con ello se abrió un nuevo corredor estratégico para la exportación de la cocaína a Estados Unidos.

La primera organización mexicana en involucrarse de manera profunda en el tráfico de cocaína colombiana fue el “*Cartel de Juárez*”, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, conocido también como el “Señor de los Cielos”. Adquirió este apodo porque construyó una gran flota aérea para transportar la cocaína colombiana de América Central a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El cartel de Juárez fue rápidamente seguido por otras organizaciones mexicanas narcotraficantes, como el “*Cartel de Tijuana*”, que se consolidó bajo el mando de los hermanos Arellano Félix.

En 1989-1990, se combinaron importantes acontecimientos ocurridos tanto en América Central como en Estados Unidos, que cambiaron la situación, reduciendo el rol de Centroamérica en el contrabando de cocaína y expandiendo, al mismo tiempo, la importancia de la conexión de los carteles colombianos con México.

El vicepresidente de turno, George H. W. Bush, se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1989. En diciembre de ese mismo año ordenó la invasión a Panamá. Como

parte de esta operación, se capturó al general Noriega, poniendo punto final a su participación en el tráfico de cocaína.

Es importante recordar que durante los primeros meses de su presidencia y antes de invadir a Panamá, el presidente Bush optó por cortar toda ayuda a los Contras y prefirió apoyar el proceso de paz llamado *Esquipulas II*, encabezado por el presidente costarricense Oscar Arias. Finalmente, entre 1990 y 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se inició el restablecimiento de la institucionalidad estatal en América Central.

Caen los carteles colombianos, aumenta la siembra de coca

Simultáneamente, la industria de la cocaína colombiana sufrió cambios mayores dentro de su propia estructura, facilitando así una mayor participación de los traficantes mexicanos. En agosto de 1989, Pablo Escobar mandó asesinar en las afueras de Bogotá al entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán.

En represalia, el presidente Barco declaró una guerra total al cartel de Medellín, y, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una campaña militar contra Pablo Escobar y toda su organización. Para 1991, Escobar inició negociaciones con el gobierno colombiano, acordando su sometimiento a la justicia. Su aseguramiento, financiado por él mismo, se llevó a cabo en la “*prisión*” llamada irónicamente “La Catedral”, localizada en Envigado, Antioquía, a las afueras de Medellín.

En 1992, Pablo Escobar escapó de su propia cárcel burlándose del gobierno, y reinició sus actividades de contrabando de cocaína. De inmediato, se formó un “*bloque de búsqueda*” para perseguirlo. Escobar fue encontrado y asesinado por las fuerzas de seguridad colombianas el 3 de Diciembre de 1993, con la participación substancial de Estados Unidos.

Para inicios de 1994, el asesinato de Escobar, junto con el inmediato arresto de la mayoría de los otros capos del cartel de Medellín por las fuerzas colombianas, dejó a los miembros del cartel de Cali en una posición dominante en la industria de la cocaína, tras haber cooperado con las autoridades en la caza de Pablo.

Sin embargo, para mediados de 1995, la presión proveniente tanto de las autoridades colombianas como de las estadounidenses, que exigían la aplicación de la ley en contra del cartel de Cali, obligó a sus jefes, los hermanos Rodríguez Orejuela, a aceptar los términos de negociación que les ofrecía la administración del entonces presidente Ernesto Samper.

La rendición efectiva de los dos principales jefes del cartel de Cali en 1995 marcó el final de la era de dominación en el comercio de cocaína en Colombia de los dos carteles, Medellín y Cali. Esto se logró a pesar del desprestigio de la administración Samper, pues desde sus inicios en agosto de 1994 debió enfrentar serias acusaciones de haber aceptado 6,1 millones de dólares del cartel de Cali para su campaña electoral y a cambio de obtener un trato favorable.

Pero esto no significó el final del papel jugado por Colombia en el tráfico de cocaína. De hecho, a mediados de la década de los noventa, Colombia logró suplantar rápidamente a Perú y Bolivia como el mayor productor de coca de los Andes. Esto sucedió gracias a la acción del gobierno del presidente de Perú, Alberto Fujimori. Este gobierno comenzó a derribar aeronaves transportadoras de pasta básica provenientes del valle del Alto de Huallaga en Perú y la región del Chapare de Bolivia, destinados a los laboratorios dentro del territorio de Colombia, interrumpiendo efectivamente el puente aéreo previamente establecido entre Perú y Colombia.

Con el fin de contrarrestar estos cortes en el aprovisionamiento de materia prima, se desarrolló en Colombia un *boom de cultivos de coca* en los llanos orientales y en las regiones de la cuenca del Ama-

zonas en el este y sur del país. Por ello, a inicios de 2000 Colombia ya cultivaba un estimado de 90 por ciento del suministro disponible de coca en la región.

Cartelitos, guerrillas y paras

Pero la caída de los carteles de Medellín y Cali dejó un vacío en el comercio de cocaína colombiana. Algunos traficantes colombianos buscaron reconstruir los carteles mayores a partir de los restos del cartel de Medellín (por ejemplo, el cartel del Milenio, encabezado por Alejandro Bernal a finales de los noventa) o de Cali (como el cartel del Valle del Norte, cuyo jefe Don Diego, monopolizó el negocio de la coca desde los noventa hasta 2008). Pero la mayoría de estos esfuerzos fracasaron porque los carteles grandes, prominentes y violentos, atraían demasiada atención de las agencias antinarcóticas y de inteligencia colombianas y estadounidenses.

Como consecuencia, este vacío fue rápidamente copado por un número creciente de “cartelitos”. Para evitar ser detectados y arrestados, los cartelitos asumieron un perfil menos violento y menos notorio en la política, por lo que, hacia el año 2000, existían ya en Colombia aproximadamente 300 pequeños cartelitos que llenaban eficazmente el espacio dejado por el desmembramiento de los carteles de Medellín y Cali. El cartel del Norte del Valle logró sobrevivir hasta el 2008, bajo una furiosa persecución de las fuerzas colombianas y estadounidenses.

Estos nuevos cartelitos cedieron el control del cultivo y procesamiento de la coca en las zonas rurales colombianas a la guerrilla izquierdista de las FARC y a la organización paramilitar derechista de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las FARC y las AUC controlan de hecho la mayoría de las áreas de cultivo de coca en las zonas rurales de Colombia, emplean-

do su poder de fuego, mientras sostienen una sangrienta guerra por la expansión del control territorial.

Enfocados principalmente en la exportación de la cocaína refinada obtenida de las FARC y de las AUC, pero con capacidades logísticas mucho menores en comparación con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cartelitos quedaron cada vez más atomizados, lo que los obligó a forjar alianzas y relaciones comerciales con organizaciones criminales y traficantes, dentro y fuera de Colombia, creando así nuevos espacios y oportunidades para los carteles mexicanos, que rápidamente y con entusiasmo ampliaron su poder, ubicándose en una posición dominante en el negocio.

México: Juárez, Tijuana, Sinaloa, el Golfo

Durante la segunda mitad de los noventa, varios grupos mexicanos comenzaron a incursionar en el negocio de la cocaína, primero en Juárez, bajo la dirección de la familia Carrillo Fuentes y luego en Tijuana, con la familia Arellano Félix. Estas familias se involucraron progresivamente en el comercio de cocaína traída de Colombia.

Al principio los acuerdos alcanzados con el cartel de Medellín establecían que la paga a las organizaciones mexicanas consistía en una tarifa fija por sus servicios. Viéndose en desventaja, las organizaciones mexicanas comenzaron a exigir una mayor participación en las operaciones de contrabando. En lugar de fuertes comisiones como pago, comenzaron a demandar la mitad de cada cargamento de cocaína colombiana. A cambio, las organizaciones mexicanas garantizaban a los cartelitos colombianos la entrega de la otra mitad en Estados Unidos. Si fallaban, los colombianos eran compensados por sus pérdidas a un precio previamente acordado.

Bajo estos nuevos términos, las organizaciones mexicanas profundizaron rápidamente su implicación en el negocio altamente

lucrativo de *distribución* de cocaína en Estados Unidos. Al mismo tiempo se enriquecieron y se hicieron más poderosas y violentas. Por lo menos desde el año 2000, los carteles mexicanos dominan y concentran las mayores ganancias.

Los carteles de Juárez y Tijuana no fueron las únicas bandas de traficantes que buscaron enriquecerse por el *boom* del tránsito por México de cocaína de Colombia. En los primeros tres años de su sexenio, el presidente Vicente Fox –el primer presidente no perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el cual gobernó México por 71 años– lanzó una campaña contra el creciente poder y violencia de los carteles de Juárez y Tijuana.

Sus éxitos contra ambos carteles se debieron en gran parte a la exitosa transición del PRI al Partido Acción Nacional (PAN), pues se dio una ruptura en los patrones tradicionales de soborno entre los elementos partidistas tradicionales que formaban el gobierno mexicano y los grandes carteles, debilitando claramente tanto a Juárez como a Tijuana.

Aún más, las iniciativas anti-carteles de Fox produjeron la muerte de uno de los hermanos Arellano Félix, la captura de otro y el arresto de varios capos de Juárez. El presidente Fox obtuvo elogios de Washington y de la administración de George W. Bush, pero no logró eliminar completamente a las dos organizaciones. Paradójicamente, sí creó nuevas oportunidades para otras bandas mexicanas rivales que buscaban expandir su participación en el comercio de cocaína.

En la primera mitad de la década de 2000, dos organizaciones traficantes relativamente menos prominentes –el cartel de Sinaloa encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el cartel del Golfo capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén– se movieron con un éxito considerable contra los carteles de Juárez y Tijuana, logrando

forjar sus propios vínculos con los cartelitos colombianos y también con traficantes colombianos en Perú y Bolivia.

Los carteles del Golfo y Sinaloa establecieron nuevas rutas de contrabando por aire y tierra a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo. También lucharon violentamente para conseguir el control de plazas y puntos clave a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente en Tijuana y Juárez.

Para el año 2003, los carteles de Sinaloa y el Golfo se transformaron en los actores más dinámicos, poderosos y brutales en el comercio de cocaína mexicana, suplantando exitosamente a los carteles de Tijuana y Juárez. Pronto, estos dos carteles se convirtieron en violentos rivales, cuando Sinaloa se esforzó por arrebatarse el control de la plaza del cartel del Golfo de Nuevo Laredo, que había sido controlada hasta entonces por Osiel Cárdenas Guillen y su grupo.

El cartel del Golfo respondió en 2003 con el asalto violento al cartel de Sinaloa en su zona de control, contratando como sicarios a fuerzas especiales desertoras del ejército mexicano –los infames “Zetas”– para realizar operaciones de represalia en contra de Sinaloa y del Chapo, por lo que ascendieron las “ejecuciones” y se llevaron los niveles de violencia entre los carteles mexicanos.

Mientras tanto, a pesar de sus heridas, los carteles de Juárez y Tijuana respondieron con violencia al cartel de Sinaloa, en un intento desesperado por mantener su precaria posición en el comercio de cocaína. En suma, nuevas organizaciones (como la Familia Michoacana) en otros estados mexicanos han surgido para pelear por el mercado.

Se dan nuevas luchas dentro de los grupos establecidos como el de Sinaloa (que vio a la familia Beltrán Leyva independizarse del Chapo) y que han producido una gran fragmentación interna. Las pugnas internas en los carteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, junto

con un complejo conjunto de alianzas cambiantes entre las varias bandas criminales, caracterizan hoy el escenario donde se disputan los 15 mil millones de dólares al año generados por el comercio de droga en México.

¿Se colombianizó México?

La presente lucha brutal por el control dentro y entre las organizaciones traficantes mexicanas tiene como foco las ganancias generadas por el tráfico de drogas. Es el producto de la confluencia de varios factores que han hecho de México el nuevo epicentro del tráfico de cocaína desde Colombia y los Andes hacia Estados Unidos.

México se ha convertido en la vía preferida para el tránsito de la cocaína colombiana debido a los éxitos logrados por la administración del presidente Álvaro Uribe, especialmente a partir de 2002, cuando lanzó su programa de Seguridad Democrática con apoyo del Plan Colombia.

Debido al consumo estadounidense, México se encuentra ahora en el epicentro de esta guerra sin cuartel, perjudicado además por su gigantesca y porosa frontera. La transición política de México, del PRI al PAN, generó un quiebre en el control de las líneas tradicionales de soborno de los carteles hacia los líderes políticos. La eliminación de estos “controles” permitió grandes oportunidades de expansión por parte de grupos de traficantes, sin las trabas anteriormente aplicadas por el PRI, que había mantenido por largo tiempo el tráfico de drogas en México dentro de límites “tolerables”.

La aplicación de la leyes mexicanas, que ha sido estructuralmente débil, aunada a las carencias del sistema penal y de justicia, históricamente plagados por la corrupción y el soborno, dan como resultado un *marco institucional completamente inadecuado* para con-

frontar los desafíos lanzados por las organizaciones traficantes de droga, que se aprovechan de estas debilidades.

Además, hasta hace poco Washington casi no había hecho nada para apoyar a México en su solitaria lucha contra el tráfico de droga dentro de su territorio. Washington tampoco había hecho mucho para controlar la compra y venta de armas de Estados Unidos hacia México, o para detener el flujo, ida y vuelta, de las grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo entre Estados Unidos y las organizaciones mexicanas.

La aprobación de la *Iniciativa Mérida* en 2008 constituye un primer paso hacia una nueva era en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de tráfico de drogas, aunque es una medida parcial. Para la mayoría de los analistas, el paquete de ayuda de 1,400 millones de dólares es totalmente insuficiente para lograr éxitos rápidos³.

Dada las dimensiones de este fenómeno y los problemas que México enfrenta como resultado de su conexión con Colombia, la Iniciativa Mérida representa sólo el comienzo de un gran esfuerzo cuyos resultados aún están por verse.

3 Liz Harper, "Blog Drug Flashback: U.S. Foreign Policy and the Drug War," en *Americas Quarterly: The Policy Journal for our Hemisphere*, April 8, 2009. <http://americasquarterly.org/obama-drug-legalization-mexico>